

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Manizales, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA DE TUTELA 93

RAD. 2021-000313

Procede el Juzgado a decidir la acción de tutela instaurada por **RUBIELA CAMPIÑO ZAPATA** a través de apoderado judicial en contra de la **GOBERNACIÓN DE CALDAS**. Tramite constitucional al que se vinculó al **MUNICIPIO DE AGUADAS – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**.

I. ANTECEDENTES

Indica la accionante que el pasado 19 de marzo de 2021, radicó derecho de petición ante la Gobernación de Calda de manera virtual y le asignaron el radicado GED111-2021ER-000578.

A la fecha no le han brindado respuesta su solicitud, pese haber transcurrido el tiempo de ley.

II. PRETENSIONES

Se pretende con esta acción, se tutele el derecho fundamental invocado y se ordene a la accionada brindar respuesta de fondo a la solicitud incoada.

III. PRUEBAS

Aportadas por la accionante:

Copia del derecho de petición y la constancia de recibido.

IV. TRÁMITE

Mediante auto fechado 26 de mayo de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretaron las pruebas presentadas por la parte demandante y se dispuso la notificación a la entidad accionada y vinculada, para que se sirvieran dar respuesta al escrito de tutela, dentro del término de (2) días hábiles y solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valen para su defensa. Así mismo, se ordenó la vinculación de la Alcaldía de Aguadas – Secretaría de Educación.

V. PRONUNCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES ACCIONADA Y VINCULADA.

La **ALCALDÍA DE AGUADAS** se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre el asunto, pues considera que en la acción de tutela hacen referencia directa a la Gobernación de Caldas, no obstante expresan que desde la misma fecha se procedió a dar respuesta a la solicitud la cual fue enviada al abogado promotor, sin que se hubiera interpuesto algún recurso, ampliación, aclaración o modificación de la respuesta.

La **GOBERNACIÓN DE CALDAS**, indico que, “... mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2021, el Técnico Operativo Hojas de Vida de la Secretaría de Educación, dio respuesta al Derecho de petición radicado en la Gobernación de Caldas, a cada uno de los interrogantes planteados por la accionante y expidiendo las certificaciones solicitadas, de lo anterior se le notificó a los apoderados de la señora RUBIELA CAMPIÑO ZAPATA, al correo electrónico *aprioriabogados@gmail.com*, correo electrónico suministrado en el escrito de tutela.”

En virtud de lo anterior, solicitan se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

VI. PROBLEMA JURÍDICO.

Una vez desplegados los anteriores supuestos fácticos, se procederá a determinar si efectivamente se vulneró el derecho fundamental constitucional de **PETICIÓN** al accionante por parte de la entidad accionada, al no brindar respuesta al derecho de petición incoado o por el contrario se presentó una carencia actual de objeto por hecho superado.

En esas condiciones se encuentra el expediente a despacho, y procede esta Funcionaria Judicial a resolver lo pertinente, de conformidad con las siguientes:

VII. CONSIDERACIONES

DEL DERECHO DE PETICIÓN

Según el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, para lo cual el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al reglamentar dicho ejercicio consagra en su artículo 14 el término para resolver así: Salvo norma legal especial toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días y aquellas mediante las cuales se eleva una consulta deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes. Cuando no fuere posible resolver o contestar en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, antes del vencimiento señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Frente a las características esenciales del derecho de petición, la Corte Constitucional considera que el núcleo esencial de esta prerrogativa reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, sin que necesariamente deba acceder positivamente a sus requerimientos. En ese sentido ha manifestado:

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible¹; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares²; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición³ pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa⁴; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder⁵; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.⁶

De otro lado ha dicho la jurisprudencia⁷ que la respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien ha elevado la petición, en el sentido de acceder o no a sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación que permita al peticionario conocer, frente al asunto planteado, cuál es la situación y disposición o criterio en el ente respectivo. En ese sentido afirma que se satisface ese derecho cuando se emiten y reciben respuestas que abarcan en forma sustancial y resuelven, en lo procedente, la materia objeto de solicitud, independientemente del sentido dado.

También ha reiterado la Alta Corporación⁸ que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero en todo caso debe *“cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.”* (La sub línea es del despacho).

Finalmente, el Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, en su artículo 5 dispuso:

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia

¹ Sentencia T-481 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.

² Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

³ Sentencia T-1104 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

⁴ Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.

⁵ Sentencia 219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz.

⁶ Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

⁷ Sentencia T-183 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

⁸ Sentencia T-146-2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO.

La protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye el fundamento objetivo del artículo 86 de la Constitución Política Nacional.

Este amparo conlleva a la impartición de una orden de inmediato cumplimiento, siendo este el mecanismo efectivo, cuando realmente sea necesario para superar el quebrantamiento de los derechos fundamentales.

De existir otro medio de defensa judicial, como puede ser la jurisdicción ordinaria, este impide la activación del amparo constitucional, mediante la acción de tutela, por ser este un mecanismo subsidiario y residual el cual no puede suplantar los instrumentos judiciales previstos para cada especialidad, sin embargo de manera excepcional pueda actuar este mecanismo con la condición de ser transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ese orden, cuando el accionado desarrolla los actos necesarios para deshacer el agravio, es decir, observa y satisface las pretensiones del accionante mediante la actividad tendida, arriba a lo que la teoría constitucional ha denominado la carencia actual del objeto, por ser innecesario el pronunciamiento del juez a los planteamientos de fondo del escrito de tutela.

En este sentido la Corte se ha pronunciado indicando: *"ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz"*⁹.

Las pretensiones satisfechas carecen de sentido dentro de la acción de tutela ya que:

*"(...) pierde su razón de ser cuando durante el trámite de/proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos, fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"*¹⁰, en otras palabras, si: *"previamente al pronunciamiento de/juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*¹¹.

Sobre el particular, la Sentencia T- 154 de 2017, donde actuó como Magistrada Ponente la Doctora María Victoria Calle Correa, dispone:

"De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en tres hipótesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) cuando se presenta daño consumado, o (iii) cuando se está ante un hecho sobreviniente"

*En lo que respecta a la carencia actual de objeto por hecho superado, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido que esta **se presenta cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario.**" (Negrillas Propias.)*

A su turno, la Sentencia T – 013 de 2017, donde actuó como Magistrado Ponente el Doctor Alberto Rojas Ríos, indicó que:

*"No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial. (...) **En ese orden, si la acción de tutela busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales,** en otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."* (Negrillas propias.)

VIII. CASO CONCRETO

La presente acción constitucional fue interpuesta por la señora Rubiela Campiño Zapata, por la presunta violación de su derecho fundamental de petición, ya que el pasado 19 de marzo de 2021, radicó una solicitud ante la Gobernación de Caldas sin recibir ningún pronunciamiento de su parte, motivo por el cual pretende que a través de este mecanismo se ordene a la demandadas brindar una respuesta de fondo a lo pedido.

Sobre el particular, la Alcaldía de Aguadas solicitó ser desvinculadas de la acción al no estar involucrados con el fondo del asunto. La Gobernación de Caldas, indicó que el 31 de mayo de 2021 brindaron respuesta a la petición la cual fue enviada al correo electrónico de su apoderado, no obstante, no aportó prueba de entrega del mismo.

⁹T-011 de 2016.

¹⁰T-970 de 2014.

¹¹T-168 de 2008.

Ante la incertidumbre de su entrega, en aras de garantizar los derechos de la actora y de cumplir con el objeto normativo y jurisprudencial de poner en conocimiento la respuesta a la peticionaria, este Despacho envió la contestación al email de notificaciones del apoderado demandante, para que tuviera acceso a ella y se obtuvo un reporte de entrega satisfactorio. (archivo 09 y 10 E.D)

Así entonces, al verificar los términos de que trata la ley 1755 de 2015, puede inferirse que la entidad accionada, si bien presentó una respuesta, omitió ponerla en conocimiento de la interesada o por lo menos allegar prueba de esa entrega. No obstante, para superar dicha situación, en aras de brindar una solución efectiva y una adecuada administración de justicia, el Despacho procedió a enviar la contestación al apoderado de la peticionaria y con ello desaparecer los motivos que dieron inicio a este trámite sumarial para garantizar la protección de los derechos fundamentales del mismo.

Así las cosas, esta Juez Constitucional determina, que si bien es cierto existió una controversia que generó la reclamación por vía de acción de tutela, actualmente ha dejado de existir ante la respuesta de fondo brindada por parte de la accionada al derecho de petición incoado por la parte accionante y haberse puesto en conocimiento de la interesada por parte de este Despacho; por lo que a este punto de la tutela resulta inútil e irrazonable ahondar más sobre el asunto, estando en tal sentido en el caso objeto en estudio, frente a una carencia actual de objeto por “Hecho Superado” y en consecuencia la acción de tutela impetrada carecería de eficacia y razón de ser, accediéndose a la petición entablada por la parte accionada.

Por consiguiente, al desaparecer los motivos por los cuales se interpuso la presente acción, resulta inocuo realizar cualquier tipo de consideración sobre lo pretendido, presentándose sobre esta acción tuitiva el fenómeno de la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**, pues durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que dieron origen a la solicitud de amparo, siendo innecesario que se formulen observaciones especiales sobre la materia o que se profiera una orden puntual de protección¹².

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

RESUELVE

PRIMERO: DECLARA que sobre la presente acción de tutela instaurada por **RUBIELA CAMPIÑO ZAPATA** a través de apoderado judicial en contra de la **GOBERNACIÓN DE CALDAS** ha operado la **CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO**.

¹² Sentencia T 059 de 2016 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito a las partes, informándoles en tal acto que pueden impugnar esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, se ordena remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VALENTINA SANZ MEJÍA

JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA

JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **54d78965c31bea9ef8b242d4c11c8587abd925d867fd3aee8a3467a923c283ff**

Documento generado en 03/06/2021 04:17:03 PM